

## A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

ALEXANDRA FERNÁNDEZ GÓMEZ, *Diputada del GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA*, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita **respuesta por ESCRITO relativa al coste de rescatar la AP-9.**

Desde hace meses, asistimos a un nuevo culebrón en torno a la Autopista del Atlántico, la AP-9, en relación a su posible compra por parte de distintas empresas multinacionales. Su alta rentabilidad que conoce bien su actual propietaria, el grupo Itínere y la empresa Audasa, es objeto de nuevos pretendientes mientras va camino de ser la autopista más explotada del estado en manos privadas. Una arteria fundamental en Galicia pero que encalla constantemente con la falta de políticas públicas por parte del Ministerio de Fomento que bascula siempre hacia el lado de los intereses privados.

Nunca debió prorrogarse su concesión, que efectivizó el Gobierno del PP del Señor Aznar, dejando a Galicia un lastre muy pesado y abultadamente caro: pagar peajes hasta 2048 cuando autopistas de la misma generación terminan su explotación en noviembre de este año. Sus tasas están entre las más elevadas del estado, aportando importantes beneficios a la concesionaria AUDASA. Desde el ámbito social, económico, político y profesional se ha dicho basta ya en numerosas ocasiones sin encontrar el eco adecuado a demandas justas por parte de la Administración titular de la vía. Sus tasas son una rémora para la movilidad y para la competitividad. .

Son múltiples las peticiones para que se transfiera a Galicia su gestión, apoyadas por acuerdos unánimes en el Parlamento gallego. Son reiteradas las demandas canalizadas en el Congreso por parte de En Marea en dicho sentido, con proposiciones de ley vetadas por el anterior Gobierno quien en un ejercicio claro de falta de voluntad política siempre se escudó en el alto precio del rescate. Un rescate que primero cifró en unos 4.300 millones de euros, y que finalmente, en el último veto del pasado mes de marzo a una proposición de ley de EN Marea, llegó a aumentar de forma escandalosa hasta los 8.870 millones. Se inflaron los cálculos artificialmente para justificar el constante juego de negativas a la transferencia.

El anterior Ministerio de Fomento alegaba cifras astronómicas para rescatar la AP-9, al tiempo que rescataba las radiales madrileñas y otras por 3.700 millones. Actualmente, observamos las oscilaciones de un proceso de compra en el que se barajan cifras muy modestas. De hecho, el fondo de pensiones APG (Holanda) anunció la adquisición de la participación en Itínere de Gateway Infrastructure Investments, uno de los

fondos gestionados por Corsair Capital (hasta ahora socio principal con un 38%) por 722 millones de euros. Audasa es la concesionaria de la AP-9 integrada en Itínere.

La cifra que se está ofreciendo para la operación, fijaría el coste de Itínere, todo el grupo, en unos 1.300 millones de euros.

En conclusión, y a la vista de las reducidas cifras de compra que se están barajando, cabría preguntarse cuánto cuesta en realidad la Autopista del Atlántico. Está claro que ni 4.300 millones, ni más de 8.870 millones pueden ser los precios de la AP-9.

Dado que se produjo un cambio de Gobierno, sería idóneo conocer la posición del actual Ministerio en relación a la transferencia de la AP-9.

¿Cuál es la opinión del actual Ministerio de Fomento en relación a los vetos del anterior Ministerio a las proposiciones de ley de transferencia de la AP-9, tanto las procedentes del acuerdo del Parlamento gallego, como las presentadas por En Marea?

¿Qué consideración realiza respecto a las cifras de coste del rescate que alegaba el anterior gabinete ministerial, fijándola primero en 4.300 millones, y alegando en un segundo veto a En Marea que podría ascender a 8.870 millones? ¿No cree que se trata de cálculos desmesurados que no responden a la realidad objetiva?

¿Cómo se explica que un Ministerio maneje costes tan abultados cuando en el proceso posible de compra que han propuesto fondos de pensiones, APG, de adquisición de Itínere se fija en 1.300 millones? Siendo esas las cifras que se barajan, ¿Cuánto costaría entonces la AP-9?

¿Es posible que desde el actual Ministerio se hagan cálculos más fieles a la realidad? ¿No es suficiente con que los gallegos y las gallegas continúen pagando por circular por una vía de una generación de autopistas que terminan su concesión en noviembre próximo, salvo la AP-9? ¿No le parece una situación absolutamente injusta para Galicia?

Siendo así, ¿Por qué no se da un paso al frente y se abre la vía por parte de Fomento para la transferencia de la AP-9 en línea con lo propuesto en la proposición de ley de En Marea?

¿Cuál es la posición del Ministerio en relación a la proposición de ley de En Marea para la transferencia de la Autopista del Atlántico? ¿Recibiría su apoyo?

13 de septiembre de 2018



Alexandra Fernández Gómez

Diputada UP-ECP-EM